

Un laberinto de papel. Fábricas de pasta de celulosa y conflicto socioambiental en el río Uruguay

Carlos Reboratti

Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geografía
creborat@arnet.com.ar

Recepción: octubre 2009

Aceptación: marzo 2010

Resumen

Las fábricas de pulpa de celulosa tienen una historia de ser potencialmente contaminantes y, por lo tanto, el foco de conflictos en muchas partes del mundo. En el caso de la instalación de una planta de este tipo en la orilla oriental del río Uruguay —que marca la frontera entre la Argentina y el Uruguay—, un fuerte y activo movimiento ambientalista espontáneo en la cercana ciudad argentina de Gualaguaychú se pronunció en contra de la instalación de la pastera. Al intervenir los gobiernos de ambas naciones, de un problema relativamente pequeño y localizado se pasó a un verdadero conflicto geopolítico de solución incierta. La nueva escala del problema eliminó la posibilidad de llegar a algún entendimiento que no implicara —a ambos lados del río— costos sociales, políticos y económicos excesivamente altos para todos los actores.

Palabras clave: conflicto socioambiental, fábricas de pasta de celulosa, contaminación.

Resum. *Un laberint de paper. Fàbriques de pasta de cel·lulosa i conflicte socioambiental al riu Uruguai*

Les fàbriques de pasta de cel·lulosa tenen fama de ser potencialment contaminants i, per tant, motiu de conflictes en moltes parts del món. Arran de la instal·lació d'una planta d'aquest tipus a la riba oriental del riu Uruguai —el qual delimita la frontera entre l'Argentina i l'Uruguai—, va aparèixer un espontani i actiu moviment ecologista a la ciutat argentina de Gualaguaychú que provocà que aquesta ciutat es declarés en contra de la instal·lació d'aquesta fàbrica de paper. Aquest fet va motivar la intervenció dels governs dels dos països, per la qual cosa d'un problema relativament petit i localitzat es va passar a un veritable conflicte geopolític de solució difícil. Aquesta nova escala del conflicte va eliminar la possibilitat d'arribar a acords que impliquessin —per totes dues ribes del riu— despeses socials, polítiques i econòmiques excessivament elevades per a tots els actors.

Paraules clau: conflicte socioambiental, fàbriques de pasta de cel·lulosa, contaminació.

Résumé. *Un labyrinthe de papier. Usines de pâte de cellulose et conflit environnemental dans le fleuve Uruguay*

Les usines de pulpe de cellulose ont une histoire d'être potentiellement polluantes et par conséquent le foyer de conflits dans beaucoup de parties du monde. Dans le cas de l'installation d'une usine de ce type dans la rive orientale du fleuve Uruguay —qui marque

la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay— c'est devenu un fort et actif mouvement écologiste spontané contre l'installation de cette usine dans la proche ville argentine de Gualaguaychú. Avec l'intervention des gouvernements des deux pays, d'un problème relativement petit c'est passé à un vrai conflit géopolitique de solution incertaine. La nouvelle échelle du problème a tombé la possibilité d'arriver à aucun entendement qui n'implique pas —aux deux côtés de la rivière— de prix sociaux, politiques et économiques excessivement hauts pour tous les acteurs.

Mots clé: conflit environnemental, usine de papier, pollution.

Abstract. *A labyrinth of paper. Factories of paste of cellulose and environmental conflict in the Uruguay river*

Pulp mills are potentially damaging to the environment and have been the focus of conflicts in many parts of the world. In the case of the installation of a pulp mill in the Uruguayan shore of the Uruguay River, which is at the same time the international border with Argentina, the formation of a strong and spontaneous environmental social movement in the argentine city of Gualaguaychú against the pulp mill, made that a relatively small and local socio-environmental controversy became an almost intractable international conflict. The new scale eliminates the possibility of reaching any solution not implying —on both sides of the river— excessively high social, political, and economic costs for everyone involved.

Key words: environmental conflicts, pulp mills, pollution.

Sumario

Introducción	El conflicto
Los conflictos ambientales	De un problema ambiental local a un conflicto geopolítico
El lugar y los antecedentes del conflicto	Algunas conclusiones
Los actores del conflicto	Bibliografía

«Ninguna industria como la producción de pasta de celulosa y papel ha sido tan afectada por los movimientos sociales ambientales, en tan corto tiempo y en tan amplia escala geográfica.»
(David Sonnenfeld, 2002: 1)

Introducción

Por su potencial capacidad contaminante, las fábricas de celulosa han sido siempre el centro de conflictos desarrollados en muchas partes del mundo. Estos conflictos han incluido una gran cantidad de actores y han ocurrido en diferentes escenarios: grupos económicos internacionales, movimientos ambientalistas, gobiernos nacionales y locales de lugares tan distintos como Canadá, Finlandia, Indonesia y Brasil. Pero la mayor parte de estos conflictos se desarrollaron en el interior de un determinado país y muy pocos —si algu-

no— incluyeron una disputa internacional. Utilizando un estudio de caso, este trabajo intenta mostrar cómo y por qué motivo una controversia socioambiental local y relativamente pequeña puede llegar a transformarse en un conflicto internacional prácticamente insoluble. A partir de un problema ambiental real o imaginario, el desarrollo de la industria de la pasta de celulosa en el río Uruguay se transformó en un tema geopolítico, enredado en una compleja trama de intereses económicos, políticos y sociales.

En la primera parte, se desarrolla el concepto de conflicto ambiental, seguida de una breve descripción del contexto del conflicto y un análisis de sus actores principales. El propio conflicto es analizado en la parte siguiente con mayor detalle y concluye con una reflexión sobre las consecuencias y el futuro probable del mismo.

Los conflictos ambientales

Más allá de la ya larga discusión sobre el papel que la sociedad humana cumple dentro de la naturaleza (Hull, 2006; Coates, 1998; Williams, 2001), es evidente que la relación entre ambas está marcada por las diferentes capacidades del hombre para modificar el medio en que vive. Y dentro de estas capacidades, en la época contemporánea, es la contaminación la que aparece más claramente. Esta creciente introducción en el mundo natural de elementos ajenos al mismo es producto, por una parte, del propio aumento de la población humana, pero también, en buena medida, de una creciente capacidad de consumo, alimentados por una estructura económica cuya base está justamente en dicha capacidad y por el adelanto tecnológico que la acompaña (Simmons, 1997). La contaminación tiene muchas facetas y es generada prácticamente en todos los niveles de la actividad humana. Producción de residuos, generación de gases por combustión, contaminación con agroquímicos son todas formas de contaminación generadas en forma difusa desde el punto de vista de la responsabilidad de los emisores y cuya mitigación es tanto un problema técnico como de la formación de una conciencia ambiental entre la población. En cambio, en la contaminación generada por la producción industrial, es mucho más fácil la ubicación de los responsables y, por lo menos en teoría, la acción de control social sobre su mitigación, tanto por parte del estado como de la sociedad civil.

La contaminación industrial era tomada, hasta hace relativamente poco tiempo, casi como un efecto necesario de lo que, algo indefinidamente, se llama «progreso», un costo que había que pagar por alcanzarlo, y una externalidad generada por las empresas que no necesariamente deberían incluir en sus costos de producción. Pero a partir de mediados del siglo xx, y a medida que la contaminación crecía, también lo hacía la conciencia sobre su existencia, en buena medida empujada por los grupos que se formaban dentro de la propia sociedad reunidos alrededor de dicho tema, lo que ha dado en llamarse «ambientalismo» (Adams, 2001; McNeill, 2000).

La aparición de estos grupos —de ninguna manera homogéneamente distribuidos en el planeta— hizo que, lentamente, la búsqueda de soluciones para

la contaminación industrial se organizara a partir de un triángulo formado por las empresas, los gobiernos y el ambientalismo. Generalmente, esta búsqueda comienza por la llamada de atención hecha por el ambientalismo, al cual responde el gobierno y termina en las empresas. Cada uno de estos actores, a su vez, genera una cierta institucionalidad: se forman ONG que tratan temas ambientales, los gobiernos crean un sistema legal de protección y control del ambiente y, más recientemente, en las empresas se conforma un sistema de responsabilidad social dirigido a evitar la formación de conflictos, enmarcado en lo que ha dado en llamarse «licencia social» (Gunningham et al., 2004).

Esto no significa que ese triángulo funcione siempre de forma eficiente, dado que las relaciones entre los actores pueden verse complicadas por problemas tales como formas diferentes de comunicación, escalas de tamaño relativo, contextos sociales y políticos externos y diferenciados y, muchas veces, por racionalidades y objetivos muy distintos.

Estas fallas en las relaciones hacen que las soluciones posibles a los problemas se retrasen y, antes de llegar a una solución, pasen por etapas de creciente complejidad: discusión, controversia y, muchas veces, conflicto, aquellas «incompatibilidades fundamentales y subterráneas que dividen las partes en cuestión» (Putnam y Wondolleck, 2003: 37), una confrontación no negociada entre dos o más actores que utilizan la presión como forma de obtener sus objetivos. En este caso, nos referiremos a lo que ha dado en llamarse «conflictos ambientales», el núcleo de los cuales yace en las diferentes perspectivas, interpretaciones y representaciones del ambiente que muestran diferentes actores sociales. Al tratarse de conflictos sociales que tienen como centro un tema ambiental, podríamos también referirnos a ellos como conflictos socioambientales o conflictos sociales de raíz ambiental (Folchi, 2001). En el caso de la contaminación, el problema que se trata de solucionar es el peligro real, potencial, percibido o imaginado de daño ambiental (Timura, 2001; Molina Navarro y Ortega Santos, 2002).

Uno de los signos más evidentes del adelanto de una sociedad, y que es frecuentemente utilizado como parámetro para medir y compararlo, es el consumo de papel. Este se ha ido incrementando rápidamente a lo largo del siglo xx, si bien se ha hecho de forma muy heterogénea y claramente relacionada con el nivel de desarrollo de cada sociedad. Técnicamente, el proceso de producción de papel comienza con el corte de los árboles (naturales o plantados), que se fragmentan y se envían a las fábricas de pasta de celulosa, las cuales, a su vez, envían su producción a las de papel. Cuando el resultado buscado es la producción de papel blanco, esta pasta debe pasar por un proceso de blanqueado químico (en el cual antiguamente se utilizaba cloro libre), e incluye la utilización de una considerable cantidad de agua, que se extrae de ríos y lagos y luego se devuelve a los mismos. Este es el momento cuando, potencialmente, se genera la posibilidad de provocar una contaminación acuática por residuos industriales. Debido a ello y a muchos ejemplos donde, efectivamente, hubo contaminación, la producción de pulpa ha adquirido una muy mala reputación entre los grupos ambientalistas.

Los gobiernos —tanto nacionales como provinciales y locales— han generado una creciente presión sobre las compañías para que estas adopten las técnicas de producción no contaminantes. Esto está muy claro en los países desarrollados, pero no tanto en el resto del mundo, donde a veces existen una ambivalencia y una tensión entre la búsqueda de inversiones, las necesidades del mercado de trabajo y la protección ambiental (Accselrad, 2006).

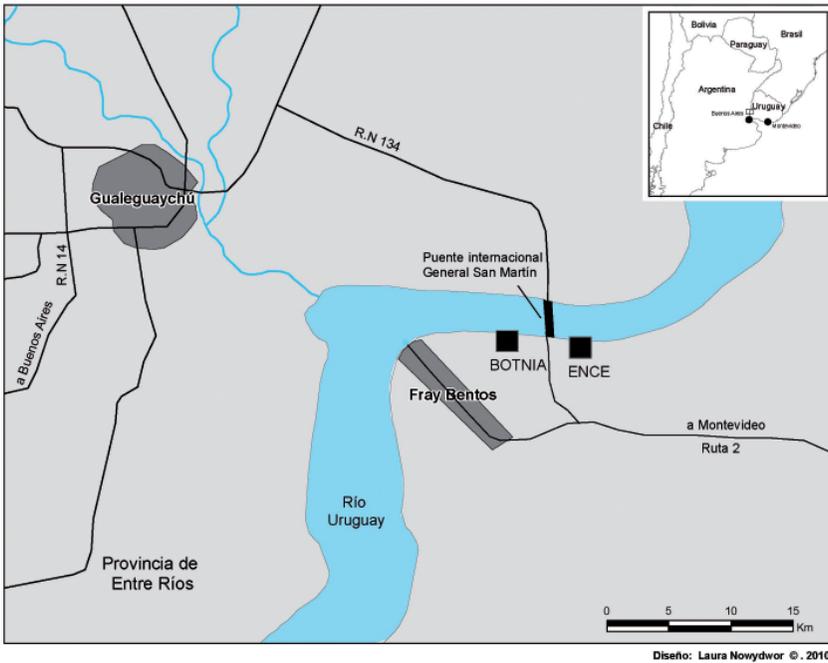
Ante esa presión oficial, la de los movimientos ambientalistas y los cambios en el mercado hacia productos «limpios», las pasteras han invertido mucho en cambiar hacia tecnologías menos contaminantes. En quince años, han pasado de usar una gran cantidad de cloro libre a procesos de blanqueado sin esa sustancia (las llamadas «tecnologías ECF», o *elementary chlorine free*) y, más tarde, a otras que directamente no la utilizan (TCF, o *totally chlorine free*) y, posiblemente, en un futuro cercano, podrían utilizar sistemas de circuitos cerrados de uso de agua, sin casi posibilidad de contaminación (Area, 2009).

Los movimientos ambientalistas desempeñan un papel fundamental en estos conflictos, a veces en forma de movimientos de base espontáneos y otras como ONG ambientalistas internacionales formalmente establecidas, como es el caso de Greenpeace. Confrontando las a veces dubitativas o débiles actitudes oficiales, esta ONG ha presionado por la adopción de medidas precautorias cada vez más fuertes (Gunningham et al., 2004).

Negociaciones y presiones de todo tipo han llevado muchas veces al cierre temporal de las fábricas hasta que estas cumplan con las regulaciones exigidas, como fue el caso de Porto Alegre a principios de la década de 1970 (Goldstein, 1992). En otras ocasiones, los proyectos de instalar una planta no se llevan a cabo, como fue el caso en Tasmania en la década de 1990, pero hasta ahora no hay ejemplos en los cuales una planta sea cerrada poco después de ser construida (Hill et al., 2002; Sonnenfeld, 1998). Casi siempre, la solución ha sido la adopción, por parte de la planta, de medidas más estrictas de control, monitoreadas muy de cerca por los estados y, a veces, incluyendo en esta tarea a representantes de las ONG involucradas (Sonnenfeld, 1998).

El lugar y los antecedentes del conflicto

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay comparten los cursos medio e inferior del río Uruguay, que comienza en el Brasil y termina en el Río de la Plata luego de atravesar casi 2.000 km., con un flujo medio de 4.700 m³/s. A lo largo del mismo, hay una serie de ciudades medianas, muchas veces ubicadas una frente a otra y conectadas por un puente. Hacia el sur, las últimas dos son Gualaguaychú, en el lado argentino (75.000 habitantes), y Fray Bentos, en el uruguayo (23.000 habitantes). Muy cercano a ellas existe un puente internacional, llamado General San Martín (ver mapa 1). Es el nexo terrestre entre los dos países más cercano a Buenos Aires y Montevideo y la continuación hacia Uruguay y el Brasil de las rutas que provienen de Chile y el océano Pacífico y, por lo tanto, el más utilizado. Antes del conflicto, transitaban por dicho puente unos 1.500 vehículos diarios. La región que rodea a



Mapa 1. Área de estudio.

ambas ciudades está dedicada fundamentalmente a la actividad agropecuaria, con una inclinación hacia la ganadería y la forestación en el lado uruguayo y hacia la producción de granos en el argentino. En Gualeguaychú hay un relativamente modesto «polo industrial», mientras que en Fray Bentos la industria local más importante fue, hasta la década de 1940, la frigorífica, actualmente cerrada. En ambas ciudades hay un incipiente desarrollo de la actividad turística de bajo costo en las playas que se extienden sobre el río Uruguay. Relacionado con esto, en Gualeguaychú se ha desarrollado toda una intensa actividad alrededor del Carnaval, el espectáculo de ese tipo de mayor tamaño en el país y que atrae a miles de visitantes en los meses de verano.

Hacia fines de la década de 1980, Uruguay decidió encarar un cambio en su base agropecuaria y generó una ley que promocionaba el uso de las tierras ganaderas de menor capacidad (hasta el momento, usadas extensivamente) para la reforestación. La ley tuvo un notable éxito y en poco tiempo la superficie forestada con pinos y eucaliptos creció hasta casi 800.000 hectáreas (Alvarado, 2005). Coincidentemente, se generó un movimiento de traslado del foco de interés de las grandes compañías papeleras del hemisferio norte al sur, atraídos por las características naturales de la zona que abarca el nordeste de la Argentina, el sur de Brasil y el Uruguay —que permiten un rapidísimo crecimiento de las especies, muy superior al que se registraba en Europa y América del Norte y adonde la producción de pasta se basa en el corte del bosque nativo.

La decisión de los países desarrollados fue separar la producción de pasta de la de papel, transformando la primera en una *commodity* que puede producirse en donde las condiciones ecológicas lo indiquen, mientras que las fábricas de papel tienden a ubicarse cerca de los mercados (Carrere y Lohman, 1996; Lima-Toivanen y Mikkila, 2006). Esto aceleró la llegada de inversores dispuestos a producir grandes cantidades de madera dirigidas a la producción de pasta de celulosa en el Uruguay.

Brasil sufrió un proceso similar de expansión de las plantaciones, aunque allí desde un principio fue acompañado por la construcción de pasteras. La Argentina, en cambio, comenzó más tarde a tomar seriamente el tema de la forestación, proceso que se concentró en el nordeste del país, pero que no estuvo acompañado por una expansión de la producción de pasta.

Los actores del conflicto

Antes de analizar el desarrollo del conflicto, es importante conocer algunas características de los actores involucrados: las empresas, los gobiernos y los movimientos ambientalistas.

Las dos empresas involucradas fueron ENCE (Empresa Nacional de Celulosa de España) y Botnia. La primera había sido originalmente una empresa estatal española, privatizada a principios de la década de 1990 y que ya había establecido grandes plantaciones de eucaliptos en el Uruguay para producir *chips* de madera para su exportación. Su proyecto fabril incluía la construcción de una planta con capacidad para producir medio millón de toneladas anuales de pulpa. La segunda es una empresa finlandesa con un proyecto para producir un millón de toneladas de pasta por año utilizando eucaliptos provenientes de sus propias plantaciones y también comprando madera a terceros.

En el caso de los gobiernos, hay que considerar que la Argentina tiene 36 millones de habitantes y una superficie de 2.700.000 km². Uruguay tiene solamente 4 millones de habitantes y 176.000 km². Argentina es un país federal con un fuerte sistema presidencialista, gobernado por un partido hegemónico —el peronismo— organizado en forma vertical. Antes del conflicto, la Argentina no tenía una política ambiental clara, y el *laissez faire* era la regla general con muy poco control —si alguno— sobre los dos problemas ambientales más graves: la deforestación y la contaminación de las aguas urbanas (Hopkins, 1995; Morello, 2002). En este país hay más de diez pasteras que hasta hace muy poco tiempo no tenían prácticamente control ambiental alguno.

Uruguay, por su parte, es un país unitario que, después de 170 años de alternancia entre dos partidos tradicionales, es ahora gobernado por el Frente Amplio, una coalición de izquierda. Este país ha desarrollado, desde los años setenta, una política ambiental coherente, aunque la única planta de celulosa que hasta hace poco existía era muy antigua y sin tecnologías modernas de control de la contaminación.

En los últimos cincuenta años, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Uruguay fueron excelentes y se establecieron entre ambos países lazos eco-

nómicos, sociales y culturales, marcados por la fuerte afluencia de argentinos para pasar sus vacaciones de verano en el vecino país, para lo cual el puente General San Martín era el principal vínculo terrestre.

Como sucede en muchos países de América Latina, en la Argentina los movimientos ambientales tienen una historia relativamente corta, ya que en su mayoría se formaron a mediados de los años setenta (Christen et al., 1998; Roberts, 2000; Price, 1994; Reboratti, 2008). Al principio eran fundamentalmente lo que Bryant y Bailey (1997) llaman «ambientalismo profesional», esto es, ONGs centradas en el análisis de los temas ambientales antes que en la acción política, pero luego fueron cambiando hacia formas más participativas.

La organización ambientalista formal que estuvo más involucrada en el conflicto es la filial argentina de Greenpeace, la cual decidió, como normalmente lo hace, por la estrategia de una gran exposición mediática, basada en acciones rápidas y llamativas y campañas cortas. A su manera, ha estado muy activa en el conflicto, organizando algunas demostraciones en el río, y desde muy temprano tomó una abierta posición contra la eventual contaminación generada por la instalación de las pasteras, lo que está en consonancia con su posición internacional (Sonnenfeld, 2002; Villalonga, 2006).

En el caso del Uruguay, con mayor tradición ambientalista, la oposición a las pasteras fue comandada por algunas ONGs nacionales (que ya habían cuestionado el proyecto nacional de forestación con eucaliptos), pero se enfrentaron con el problema de que la gran mayoría de la población apoyaba la instalación de las plantas, al verlas como una forma de modernización de la economía y una atracción de inversiones extranjeras (Alvarado y Reboratti, 1996).

Está claro que el actor más importante en el conflicto por las pasteras ha sido la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualaguaychú (ACAG). Como muchos otros casos en la Argentina, se trata de un movimiento social espontáneo, organizado horizontalmente, sin autoridades ni voceros formales y donde todas las decisiones se toman en forma de asamblea. Estas características hacen que la ACAG sea muy bien considerada a los ojos de la sociedad, la cual, después de sucesivas crisis económicas y políticas y hechos de corrupción y mala administración, ha perdido su fe en el aparato político tradicional y ve con simpatía un movimiento social que no acepta compromisos políticos y en realidad no confía en nadie.

El conflicto

Aunque en un principio la forestación en Uruguay estaba dirigida a la exportación de madera en *chips*, era obvio que la intención final era la instalación de plantas de procesamiento y producción de pasta de papel. Los primeros proyectos al respecto comenzaron a conocerse hacia el año 2001, pero se concretaron recién tres años más tarde, con ofertas de radicación de ENCE y Botnia, que generaron la oposición de los movimientos ambientalistas nacionales. Estos, como vimos, no pudieron captar el interés de la opinión pública, ni nacional ni mucho menos la de los habitantes de Fray Bentos, localidad cerca de la cual

se iban a instalar las dos plantas. Ante esto, se dirigieron a la vecina ciudad de Gualaguaychú, adonde su prédica tuvo un notable efecto, posiblemente por la larga tradición de acción comunitaria de esta localidad y la aparición en el imaginario público de una amenaza al río Uruguay, tal vez la metáfora más evidente de lo que podríamos llamar su identidad paisajística (Aboud y Musseri, 2007).

A medida que avanzaban los planes para la instalación de dos pasteras sobre el río, los habitantes de Gualaguaychú comenzaron a organizar su protesta. En ese momento, los grupos ambientalistas locales eligieron un emblema que luego se transformó en el núcleo del conflicto: no pedían que las pasteras no contaminaran, sino que exigían que no se instalaran. «No a las papeleras» (luego transformado en «No a Botnia») pasó a ser su lema. Desde un principio, la ACAG tomó como propias las catastróficas ideas del ambientalismo más radicalizado, lo que la llevó a adoptar una posición inflexible contra la construcción de las plantas y a rechazar todo tipo de negociación. El simple dato de que esas plantas estaban siendo construidas en otro país nunca pareció importarles. El ubicar el centro de sus reclamos en la construcción de las plantas y no en los efectos que su producción podría tener ubicó al conflicto, casi desde su inicio, en un laberinto de difícil solución.

Hasta ese momento, para el Gobierno argentino, el potencial problema por la instalación de las pasteras era considerado como un tema menor de las relaciones diplomáticas con el Uruguay. Había habido contactos entre las respectivas cancillerías que habían llevado a un acuerdo informal a propósito de la formación de una comisión binacional encargada del control de los potenciales efectos contaminantes de las plantas, lo que en ese momento (y en realidad hasta ahora) aparecía como la mejor solución para todos (CARU, 5/15/2004).

En octubre del 2005, el Gobierno uruguayo autorizó formalmente la instalación de ENCE, lo que enardeció a los miembros de la ACAG, que, ante lo que consideraban una inacción del Gobierno argentino y para llamar la atención sobre el tema, decidieron bloquear de forma temporaria el cercano puente sobre el río Uruguay. La estrategia de la ACAG fue cambiando durante el conflicto. Sus primeras acciones eran simples movilizaciones de la población a través de la organización de actos públicos, pero esto probó ser poco efectivo, lo que los llevó al bloqueo.

La táctica del corte de rutas y puentes es una herramienta de presión frecuentemente utilizada en la Argentina desde mediados de los años noventa por diferentes grupos sociales y ha dado lugar a la aparición de una figura emblemática, el «piquetero», nombre originalmente dado a los integrantes de los movimientos de desocupados que fueron los que primero utilizaron esta táctica. Aunque la similitud de metodología es evidente, la ACAG ha evitado ser llamada «piquetera», ya que ese nombre identifica a grupos de las clases de menores ingresos, mientras que la ONG de Gualaguaychú está formada principalmente por grupos de clase media. Desde ese punto de vista, la ACAG es claramente diferente de los movimientos ambientalistas de América Latina generados en las clases populares (Gudynas, 1992).

Es difícil estimar el tamaño que tiene esta organización, ya que, en teoría, todos los habitantes de Gualaguaychú pueden participar en ella, pero el número de miembros activos se puede calcular en unos 4.000 (Salmenkari, 2007). Su capacidad para convocar a personas de otras partes del país ha sido notable. Esto es consecuencia de la imagen positiva que tiene en la opinión pública; de la frecuencia de su aparición en algunos medios masivos de comunicación (sobre todo la televisión); de su activa participación en la red de movimientos ambientales del país y del hecho de que varios pequeños partidos políticos aprovechan la popularidad de esta ONG y se apresuran a movilizar a sus miembros en cada ocasión que se les presenta.

Pocos meses después, en febrero de 2005, Uruguay autorizó una segunda planta (Botnia), ubicada a solo 15 kilómetros de la primera, y su construcción comenzó inmediatamente. La respuesta de la ACAG fue la movilización de 40.000 personas que otra vez ocuparon el puente, con una considerable cobertura en los medios masivos de comunicación. A partir de allí, el tema creció en importancia y complejidad.

Teniendo en cuenta las repercusiones sociales y políticas que podía tener el problema, el Gobierno argentino comenzó a mostrar una mayor preocupación. En mayo de ese mismo año se realizó una reunión por parte de los presidentes de ambos países. El resultado fue la creación de un «grupo de expertos» que se suponía iba a redactar en seis meses un informe conjunto sobre el potencial impacto ambiental de la instalación de las pasteras (Aboud y Musseri, 2007).

Ante la presión de la ACAG, el Gobierno argentino solicitó que la construcción de la planta se detuviera hasta que el informe hubiera sido completado y, al mismo tiempo, comenzó a obstaculizar los esfuerzos del Uruguay para buscar financiamiento internacional para dicha construcción. Pero Botnia no paró la construcción, mientras que ENCE recién estaba comenzando a preparar el terreno para la suya. Para febrero de 2006, el grupo de expertos no pudo llegar a generar un informe único, y finalmente generó dos que fueron contradictorios en sus conclusiones. En vista de dicho resultado, el bloqueo se hizo permanente y dañó considerablemente la temporada turística, con pérdidas estimadas por el Uruguay en 400 millones de dólares.

Ese país realizó una sostenida protesta formal en la que pedía que Argentina cumpliera con los acuerdos internacionales y regionales de libre circulación entre los países, pero esas demandas no fueron escuchadas, el Gobierno argentino no tomó medida alguna para liberar el puente y hasta justificó ese hecho. El Gobierno peronista había hasta ese momento evitado reprimir a los grupos piqueteros y había tratado de resolver los casos por otros métodos tales como la negociación, la presión política y la distribución de beneficios sociales entre los activistas para promover divisiones internas y debilitar esos movimientos sociales. Al no tener el Gobierno una política ambiental, adoptó en la práctica el punto de vista del ambientalismo más radicalizado, aunque a largo plazo esa actitud no apaciguó a la ACAG y solo logró que el puente se liberara por un corto tiempo.

La esperanza de una solución creció cuando los presidentes Kirchner y Vázquez se encontraron en Santiago de Chile en marzo de 2006, en ocasión de la jura de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile. Por el contrario, el conflicto se agudizó: Vázquez anunció la detención de las obras (algo que no podía garantizar) y, por su parte, Kirchner prometió la apertura del bloqueo, algo que en realidad no tenía intención de hacer. Botnia aceptó parar las obras por solo una semana, y ante esto la ACAG ocupó otra vez el puente.

En mayo, la Argentina llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Basó su demanda en la supuesta violación, por parte del Uruguay, del Tratado del Río Uruguay, que había sido firmado quince años antes en relación con el manejo conjunto de dicho curso de agua. Al mismo tiempo, se pedía una medida cautelar para suspender la construcción de Botnia hasta que el juicio terminara. Satisfecha por esta acción, la ACAG abrió el puente, pero antes organizó una enorme marcha (entre 70.000 y 100.000 personas), la más grande hasta el momento relacionada con un tema ambiental. La presentación del Gobierno argentino estaba destinada a apaciguar a la ACAG, pero tuvo como consecuencia dañar las largas y amistosas relaciones con el Uruguay y poner en peligro la posibilidad de formar una comisión técnica bilateral de control.

En ese mismo mes, los presidentes del MERCOSUR y la UE tuvieron una reunión en Viena, adonde Greenpeace organizó su más conocida acción publicitaria: una joven apenas vestida con un bikini se paseó delante de los presidentes agrupados para una foto oficial llevando un cartel que decía «No a la contaminación de las papeleras» (Reboratti, 2007) y esa imagen dio la vuelta al mundo.

Al transformarse en un tema nacional, y por lo tanto incluir otros intereses y perspectivas, el conflicto cambió de escala y escapó a cualquier posible racionalidad. En el Uruguay, tanto el Gobierno como la oposición lo veían como la imposición de un país grande sobre otro pequeño y como una potencial amenaza a la mayor inversión que había tenido el país en su historia. En ese contexto, ENCE anunció que, para evitar mayores conflictos, modificaba su proyecto y lo ubicaba aguas abajo del río Uruguay, en la localidad de Conchillas. Este nuevo proyecto, que doblaba en capacidad el original (y que provocó en la ACAG solo una protesta retórica, lo cual hizo clara la escala muy local donde esta ONG se mueve), tuvo luego una historia compleja, ya que ENCE, aun habiendo sido aprobada su nueva localización, nunca comenzó la obras, y finalmente terminó vendiendo todas sus inversiones en Uruguay a un consorcio formado por capitales chilenos y suecos.

En un intento de apaciguar y controlar a la ACAG, el Gobierno argentino nombró como secretaria del Medio Ambiente a Romina Piccolotti, que, desde una ONG ubicada en la provincia de Córdoba, había actuado como consejera legal de la ACAG en el área internacional. (*La Nación*, 6/27/2006).

En julio, la Corte Internacional de Justicia anunció que no aceptaba la medida cautelar pedida por la Argentina y, al mes siguiente, el Uruguay llevó el tema del bloqueo al tribunal del MERCOSUR. Este aceptó la presentación y en pocos meses se expidió haciendo a la Argentina responsable del bloqueo

(Palermo, 2007), a lo cual ese país respondió diciendo que no aprobaba el uso de la violencia, pero no adoptó ninguna iniciativa para liberar el puente.

A fin de intentar solucionar el conflicto, el rey de España accedió a actuar como mediador (se utilizó la palabra «facilitador», que parecía menos comprometida), inmediatamente nombró un representante y llamó a ambas partes a reunirse para llegar a un acuerdo. Aun cuando la ACAG no fue invitada, hizo muy clara su posición: la única solución aceptable era la erradicación de Botnia. A lo largo del año 2007, se sucedieron varias reuniones sin resultado alguno y, en octubre, Botnia anunció que la construcción estaba prácticamente terminada y solo necesitaba la autorización del Gobierno uruguayo para comenzar a operar (*Clarín*, 10/2/2007). Dado que las elecciones presidenciales de la Argentina eran inminentes, y como signo de conciliación, éste decidió postergar ese permiso hasta después que aquellas tuvieran lugar (*Clarín*, 11/2/2007). Como en noviembre se iba a realizar una reunión de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, se generó una gran expectativa sobre la posibilidad de que, finalmente, los presidentes de ambos países, con la ayuda del rey, llegaran a una solución negociada, pero nada de eso sucedió: una delegación de la ACAG fue saludada afectuosamente por el presidente Kirchner diciéndoles que representaban una «causa nacional», e inmediatamente el presidente Vázquez respondió llamando a Montevideo y ordenando que se le diera a Botnia el permiso para comenzar (*Clarín*, 11/9/2007). Todas las negociaciones se paralizaron, Botnia comenzó a producir, el puente fue definitivamente cerrado por la ACAG y la nueva presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunció que la única solución posible era esperar el fallo de la Corte Internacional y aceptarlo, cualquiera que fuera. A eso la ACAG respondió que no aceptaría ningún fallo que se opusiera a sus intereses y que seguirían pidiendo el cierre de Botnia (*Clarín*, 2/2/2008 y 2/11/2008).

A partir de allí, el conflicto entró en un largo periodo de cuasi inactividad: para fines del 2009, el puente continuaba cerrado, Botnia llegó rápidamente a producir a capacidad completa, en la Argentina el tema dejó de ser noticia en los medios y la población se olvidó del mismo, aunque quedó un saldo positivo: una naciente conciencia ambiental. No ha ocurrido así en Uruguay, adonde la repercusión siempre fue mayor y donde la población continúa a la expectativa del desarrollo del conflicto. Hay que considerar que este ha impactado muy fuertemente en la sociedad, ya que el país nunca había experimentado un problema diplomático de tal envergadura. Lo que sucede en Fray Bentos es tomado por los uruguayos como un tema personal, y cuando los bloqueos aumentaron en frecuencia y extensión y sus consecuencias comenzaron a hacerse evidentes, el sentimiento común fue que la Argentina estaba actuando con prepotencia (*La Nación*, 2/6/2007).

De un problema ambiental local a un conflicto geopolítico

Si analizamos el conflicto desde su inicio, hay por lo menos dos importantes preguntas que se podrían hacer. La primera es por qué la ACAG adoptó desde

un principio la posición más catastrofista con respecto a la instalación de una pastera en el río Uruguay y la segunda es por qué este movimiento se desarrolló sin tener prácticamente ningún interlocutor que hubiera tenido un punto de vista más moderado y práctico al respecto de las consecuencias que provocaba la posición de la ACAG.

Considerando la primera pregunta, los conflictos ambientales muestran muy claramente las limitaciones de la noción de «ciencia objetiva». La idea de que la ciencia puede actuar como un actor imparcial, neutral, racional y sin valores ni prejuicios parecería estar lejos de la verdad. Como dice Osawa (1996: 25): «En su papel como fuente primaria de legitimidad, la ciencia puede ser utilizada tanto para fundamentar posiciones militantes en conflictos ambientales como para prevenir el desarrollo de políticas hechas en base a conclusiones científicas diferentes».

Todas las partes del conflicto utilizaron con profusión datos e interpretaciones contradictorias y no existió alguien que expresara una opinión que pudiera ser considerada objetiva por todos. Desde ese punto de vista, se podría considerar a un movimiento ambientalista espontáneo como la ACAG casi como un grupo religioso que acepta y adopta una cierta idea que convierte en un acto de fe, sin cuestionar su origen. Esta idea se vuelve una verdad revelada y, a partir de allí, cualquiera que acepte y refuerce la misma es acríticamente aclamado y el que se opone o expresa algún tipo de dudas es definitivamente demonizado. De hecho, y con mucha frecuencia, la ACAG ha indicado públicamente que no está dispuesta a aceptar ninguna información científica contraria a sus posiciones (ACAG, 2006).

Tal vez el tema más complejo en este conflicto es el hecho de que, mientras la planta estaba en construcción, se estaba hablando de una potencial contaminación que iba a ocurrir en el futuro. Fue esa presunción que llevó a la ACAG a adoptar el principio de precaución en su forma más radicalizada: para evitar ese posible efecto, la planta directamente no debía ser construida. Es verdad que han habido casos de este tipo de contaminación (como sucede todavía en la Argentina), pero en muchos otros fue evitada a través de la aplicación de tecnologías modernas de producción. Botnia cumple con esos requerimientos y, de hecho, a más de dos años de plena producción, los controles realizados no dan cuenta de niveles de contaminación por encima de los exigidos por el Gobierno uruguayo (datos que la ACAG, evidentemente, considera falsos o erróneos).

En relación con la segunda cuestión: quiénes pudieran haber sido los interlocutores del movimiento ambientalista?, una primera opción es el Gobierno local, pero en este caso, desde un primer momento, apoyó absolutamente la posición de la ACAG. El Gobierno provincial tuvo una posición más ambigua: en un principio, criticó el bloqueo (aun cuando la policía provincial nunca intervino para controlarlo), pero más tarde el impacto nacional que había tenido la ACAG y la virtual aceptación de sus reclamos por parte del Gobierno nacional lo llevó a tener una posición de cada vez más apoyo a la ACAG (Lucca y Pinillos, 2007).

La intervención del Gobierno nacional también fue confusa y ambivalente. Desde un principio, la confrontación fue manejada por el Ministerio

de Relaciones Exteriores (la Secretaría de Medio Ambiente nunca tuvo una intervención pública, ni aun cuando estaba dirigida por Romina Piccolotti). A medida que el conflicto crecía y la posición de la ACAG se hacía cada vez más radicalizada y activa, el Gobierno nacional fue cambiando de posición hasta tomar como propio el tema y pedir por una «relocalización» de Botnia.

No hubo intentos por parte de la ACAG de iniciar un diálogo con el Gobierno uruguayo, caracterizado desde un principio como «títere de Botnia», ni tampoco de tratar de hacer llegar su posición a la opinión pública uruguaya. La única acción tomada en este sentido fue un intento de hacer una demostración en la plaza más importante de Montevideo, cuyo único resultado fue su expulsión violenta de dicha plaza por el público enfurecido (*La Nación*, 2/6/2007).

Por su parte, Botnia no parecía interesada en establecer un diálogo con la ACAG, de hecho, prácticamente ignoró el conflicto y hasta ahora no hay señales en su página web de que éste siquiera existiera (Botnia, 2009). Algunos analistas encuentran el origen de esta falta de comunicación en la propia cultura de la empresa, que, por primera vez, hace una inversión fuera de su país de origen (Lima Toivanen y Mikkila, 2006). Esto podría llegar a ser verdad, sobre todo si tenemos en cuenta que Finlandia es un país cuya población tiene una alta conciencia ambiental y muy fuertes regulaciones sobre contaminación industrial (Ranniko, 2001) y que en la propia Finlandia se había formado, a través de los medios de comunicación, un fuerte prejuicio sobre la idiosincrasia de la población de Gualaguaychú (Pakkasvirta, 2008). Pero al mismo tiempo sería ingenuo pensar que una compañía pueda llegar a hacer una inversión de mil millones de dólares sin tener en cuenta el contexto social regional. Botnia simplemente sacó ventaja de la existencia de una frontera internacional entre ella y el movimiento ambientalista que se oponía a su instalación, y dejó que el Gobierno uruguayo cargara con la responsabilidad de neutralizarlo y buscar una solución al tema (y de paso sufrir las consecuencias, cualquiera que fueran estas). También es posible que no hayan medido adecuadamente la escala de las acciones que la ACAG iba a llevar a cabo y la mala publicidad para la empresa que eso generaría (Kosonen, 2008).

Si miramos las relaciones de la compañía a través de la lente de la llamada «licencia social», la situación es compleja. Ese concepto puede ser definido como «las demandas y expectativas que a propósito de un emprendimiento empresarial emergen de los vecinos, grupos de ambientalistas, miembros de la comunidad y otros actores de la sociedad civil que lo rodean» (Gunningham et al., 2004: 308). En este caso, el problema surge del hecho de que existen dos «licencias sociales» opuestas y diferentes, divididas por el río Uruguay y la frontera internacional. Una, del lado uruguayo, es altamente positiva, ya que la comunidad de Fray Bentos tiene altas expectativas sobre los beneficios económicos que traería la instalación de Botnia, en cambio, del otro lado del río ocurre exactamente lo contrario, pero relacionado con la potencial contaminación que esta empresa generaría. Y es evidente que Botnia solo está dispuesta a escuchar una de estas voces...

Algunas conclusiones

El caso de las pasteras del río Uruguay muestra claramente que el funcionamiento positivo del teórico triángulo entre gobierno, ambientalismo y empresas del que hablamos al principio está basado en la presunción de que los tres actores coinciden en un objetivo común, adoptan los mecanismos necesarios para llegar al mismo y que el triángulo se ubica en un territorio neutro en el cual no existen incompatibilidades de soberanía. Pero si el ambientalismo toma una posición extrema de no-negociación, el gobierno pone por delante sus objetivos políticos, las empresas hacen caso omiso a su responsabilidad social para centrarse en su objetivo económico y el territorio en cuestión es compartido por más de un gobierno, es muy difícil que no se termine generando un conflicto.

Como vimos, la propia existencia de una frontera internacional es posiblemente el dato más importante —y también el menos considerado— del conflicto en cuestión, dado que trae a la luz el siempre complicado tema de la soberanía territorial, que tiene una larga historia en las relaciones entre los países de América Latina. Cuando los actores de un conflicto socioambiental están ubicados en países diferentes, la propia escala del problema cambia al introducirse el factor diplomático, y la comunicación entre actores del triángulo tiende a oscurecerse y a complicarse, aun cuando estos actúen de buena fe (lo que, en este caso, no siempre ha sido así).

¿Será que este conflicto es irresoluble? Si lo consideramos como uno que «[...] lleva a los adversarios a interacciones vívidas y volátiles, genera comportamientos estratégicos que son a menudo confusos, frustra a las partes contendientes y culmina en un empate aparentemente irresoluble» (Putnam y Wondolleck, 2003: 36), parecería que sí, solo que para algunas de las partes, ya que la pastera esta funcionando a pleno rendimiento. Es el origen, la escala y las características de los contendientes lo que lo ha tornado tan complejo. A esta altura, la solución nunca podrá llegar a ser una en la cual todos ganen, y hasta ahora ha sido de «suma cero», con una de las partes —Botnia— produciendo sin ningún control por parte de la Argentina y la ACAG bloqueando un puente internacional por dos años. Por ahora, el cambio de escala del conflicto de un problema local a otro nacional ha eliminado la posibilidad de llegar a ninguna solución que no implique a ambos lados del río Uruguay costos sociales, políticos y económicos excesivamente altos para todos los actores involucrados.

Bibliografía

- ABOUD, Lucía y MUSERI, Anabella (2007). «En caída libre. Del diferendo al conflicto». En: PALERMO, Vicente y REBORATTI, Carlos (comp.). *Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos*. Buenos Aires: Edhasa, 15-56.
- ACAG (2006). *Campañas*. Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú URL. [<http://www.noalapelera.com>, consulta: 10 de julio de 2007]
- ACCSELRAD, Henry (2006). «Cuatro tesis sobre políticas ambientales ante las coacciones de la globalización». En: *Un tema, seis ensayos: Ecología política*. Nueva Sociedad. [www.nuso.org/biblioteca, consulta: 10 de julio de 2007]

- ADAMS, William Mark (2001). *Green development: Environment and sustainability in the third world*. Londres: Routledge.
- ALVARADO, Raquel (2005). «La forestación en debate: Inversión extranjera e impacto territorial en el Uruguay». *Realidad Económica*, 215, 11-24.
- (2007). «Política forestal, plantas de celulosa y debate ambiental: Uruguay tras un nuevo modelo de desarrollo». En: PALERMO, V. y REBORATTI, C., op. cit., 57-92.
- ALVARADO, Raquel y REBORATTI, Carlos (2006). «Géopolitique de papier: usines de cellulose et conflit environnemental dans le Cone sud». *Hérodote: Revue de Géographie et de Géopolitique*, 123, 133-148.
- AREA, María Cristina (2008). «La industria de pulpa y papel y el medio ambiente». En: AREA, María Cristina (ed.). *Panorama de celulosa y papel en Ibero-América 2008*. Buenos Aires: Red Ibero-Americana de Celulosa y Papel, 398-447.
- BOTNIA (2009). Página web oficial de la empresa. [www.metsabotnia.com.es, consulta: 20 de abril de 2009]
- BRYANT, Raymond y BAILEY, Sinead (1997). *Third world political ecology*. Londres: Routledge.
- CARRERE, Robert y LOHMANN, Laura (1996). *Pulping the south: Industrial tree plantations and the world paper economy*. Londres: Zed Books.
- CARU (5/15/04). Texto del acuerdo de la Comisión Administradora del Río Uruguay, URL. [http://www.caru.org.uy, consulta: 20 de junio de 2004]
- CHRISTEN, Catherine et al. (1998). «Latin American environmentalism: comparative views». *Studies in Comparative International Development*, 33/2, 58-87.
- Clarín* (varias fechas). Edición nacional impresa. Buenos Aires.
- COATES, Meter (1998). *Nature: Western attitudes since ancient times*. Berkeley: The University of California Press.
- FOLCHI, Mauricio (2001). «Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas». *Ecología Política*, 22, 79-100.
- GOLDSTEIN, Ken (1992). «The green movement in Brazil». *The Green Movement Worldwide*. Research in Social Movements, Conflicts and Change, Sup. 2, Londres: JAI Press, 123-142.
- GUDYNAS, Ernesto (2005). *Problemas de comunicación frente a las plantas de celulosa*. [www.uruguayambiental.com/articulos/Gudynasplantascelulosacomunic.html, consulta: 5 de diciembre de 2005]
- GUNNINGHAM, Neil; KAGAN, Robert y THORNTON, Dorothy (2004). «Social license and environmental protection: why businesses go beyond compliance». *Law and Social Inquire*, 307-341.
- HILL, Marquita; SAVIELLO, Thomas y GREVES, Stephen (2002). «The greening of a pulp and paper mill». *Journal of Industrial Ecology*, 6/1, 107-120.
- HOPKINS, John (1995). *Policymaking for conservation in Latin America: National parks, reserves and the environment*. Westport: Praeger.
- HULL, Robert Bruce (2006). *Infnite nature*. Chicago: The University of Chicago Press.
- La Nación* (varias fechas). Edición nacional impresa. Buenos Aires.
- LIMA TRIVANEN, María y MIKKILÄ, Mirja (2006). «Stronger demys over newcomers in Latin American Businesses: The case of the pulp mills in Uruguay». Conferencia *Civil society and environmental conflict*. Helsinki. [www.ymparisto.fi, consulta: 13 de septiembre de 2006]
- LUCCA, Juan y PINILLOS, Cynthia (2007). «Avatares de la política entrerriana a propósito del conflicto de las papeleras». En: PALERMO, V. y REBORATTI, C., op. cit., 149-166.

- MARTÍNEZ ALIER, Juan (1997). «Justicia ambiental e distribuição ecológica dos conflitos». En: DA COSTA FERREIRA, Leila (comp.). *A sociologia no horizonte do século XXI*. Campinas: Universidad de Campinas, 78-97.
- MCNEILL, James (2000). *Something new under the sun: An environmental history of the twentieth century world*. Nueva York: WW Norton.
- MOLINA NAVARRO, Marcelo y ORTEGA SANTOS, Antonio (2002). «Por una tipología de los conflictos ambientales en perspectiva histórica: estudios de caso». En: FORCADEL, Carlos et al. *Usos públicos de la historia*. Zaragoza: VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, vol. 1.
- MORELLO, Jorge et al. (2002). *El ajuste estructural argentino y los cuatro jinetes del Apocalipsis ambiental*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- OZAWA, Carl (1996). «Science in environmental conflicts». *Sociological Perspectives*, 39/2, 219-230.
- PAKKASVIRTA, Jussi (2008). «From pulp to fiction? Fray Bentos pulp investment conflict through de Finnish Media». *Cooperation and Conflict*, 43/4, 421-446.
- PALERMO, Vicente (2007). «Papeleras: sacando las castañas del fuego». En: PALERMO, V. y REBORATTI, C. (comp.), op. cit., p. 187-238.
- PRICE, Michael (1994). «Ecopolitics and environmental nongovernmental organizations in Latin America». *The Geographical Review*, 84/1, 42-59.
- PUTNAM, Louis y WONDOLLECK, Jean (2003). «Intractability: Definitions, dimensions and distinctions». En: LWEWICKI, Robert; GRAY, B. y ELLIOTT, Michael. *Making sense of intractable environmental conflicts*. Washington: Isly Press, 35-59.
- REBORATTI, Carlos (2007). «Ambientalismo y conflicto ambiental en el río Uruguay». En: PALERMO, V. y REBORATTI, C., op. cit., 129-148.
- (2008). «Environmental conflicts and environmental justice in Argentina». En: CARRUTHERS, David (ed.). *Environmental justice in Latin America: Problems, promise and practice*. Cambridge: The MIT Press, 101-118.
- ROBERTS, John (2000). «Global restructuring and the environment in Latin America». En: KORZENEWICZ, R.P. y SMITH, W.C *Latin America in the world economy*. Londres: Praeger, 87-102.
- SALMENKARI, T. (2007). «Direct democracy in an environmental movement. Argentine Asambleas in the Uruguay River pulp mill controversy». *El Norte: Finnish Journal of Latin American Studies*, 2.
- SANTANDREU, Alberto y GUDYNAS, Ernesto (1998). *Ciudadanía en movimiento: Participación y conflictos ambientales*. Montevideo: Trilce/CLAES/FESUR.
- SIMMONS, I.G. (1997). *Humanity and environment: A cultural ecology*. Londres: Longman.
- SONNENFELD, David (1998). «Social movements, environment and technology in Indonesia's pulp y paper industry». *Asia Pacific Viewpoint*, 39/1, 95-110.
- (2002). «Social movements and ecological modernization: The transformation of pulp y paper manufacturing». *Development and Change*, 33, 1-27.
- TIMURA, Christopher (2001). «Environmental conflict and the social life of environmental security discourse». *Anthropological Quarterly*, 74/3, 104-113.
- VILLALONGA, Jorge (2006). *Presente y futuro de la industria celulosa en la región, hacia un plan de producción limpia*. Greenpeace Argentina. [www.greenpeace.org/raw/content/contaminacion/laescaladadelacelulosa.pdf, consulta: 5 de enero de 2007]
- WILLIAMS, Raymond (2001). *Palabras clave*. Buenos Aires: Anagrama.